

Socorro Ramírez V. y Luis Alberto Restrepo M.

Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)

Bogotá, CINEP - Siglo XXI Editores, 1989.

Resulta incomprensible que un año después de publicada la obra *Actores en conflicto por la paz*, aún no haya sido objeto de una especial atención por parte de la academia como tampoco de una mayor polémica por parte de los mismos protagonistas del proceso que constituye su objeto de análisis. La ausencia de reseñas, comentarios académicos o de posturas críticas frente a este libro puede ser atribuida quizás a la ausencia misma de un debate abierto en la sociedad colombiana sobre sus problemas centrales. El de la guerra y la paz constituye, sin duda, uno de ellos. Esta ausencia de debate amplio y constructivo es a la vez síntoma y condición para la reproducción de esa "cultura política autoritaria e intransigente, mayoritaria hoy en la sociedad colombiana" (p. 192), que denuncian los autores a lo largo de sus páginas.

El presente comentario tiene, por lo tanto, como fin, contribuir a abrir una inaplazable reflexión colectiva sobre los procesos de reconciliación vividos en Colombia a lo largo de la última década, a través de esta obra que tiene como virtud el haber sido concebida con la mirada del protagonista y escrita con las manos del académico. En efecto, Socorro Ramírez formó parte de la Comisión de Paz desde sus comienzos en 1982, hasta los eventos del Palacio de Justicia en 1985, los cuales constituyeron el motivo de su renuncia junto con otros miembros de la Comisión. En compañía con Luis Alberto Restrepo, esta experiencia excepcional fue sistematizada y presentada finalmente para que todos aquellos que de alguna forma "vivimos" el proceso de paz, quizás sin entender muchos de sus avances y retrocesos, compartíramos con ellos su visión del mismo.

La obra abarca el período completo de la administración Betancur (1982-

1986) con algunas cortas referencias a los gobiernos anteriores de López Michelsen y Turbay Ayala. Para introducirla, sus autores esbozan una especie de marco interpretativo acerca de la necesaria constitución de las clases y sectores sociales como sujetos históricos, capaces de configurar una identidad propia y de relacionarse con sus adversarios sociales a través de la libre confrontación civilizada. Sin duda alguna, como lo afirman los autores, "los factores explicativos de la peculiar violencia colombiana, contradictoria y dispersa, habría que buscarlos también en esta ausencia de clases sociales bien conformadas y de una clara y permanente confrontación entre ellas" (p. 35).

De igual manera, buena parte de las claves para comprender las dificultades del proceso de paz intentado en Colombia a lo largo de la década de los ochenta, debe buscarse en esta fragmentación de los grupos que conforman la sociedad civil, de los actores que la representan en la vida pública, de los dispersos centros de poder, del Estado y hasta del espacio físico mismo. Ante esta histórica realidad la pregunta a hacerse es: ¿qué perspectivas tiene la posibilidad de que un actor único aglutine en torno suyo el suficiente consenso para imponer un proyecto verdaderamente nacional?

Este marco interpretativo, riquísimo en sugerencias para la comprensión del conflicto colombiano es, sin embargo, abandonado luego por los autores para adentrarse en un riguroso y detallado análisis de los eventos acaecidos a partir del 7 de agosto de 1982. Por supuesto que el análisis del período Betancur se basa, implícitamente, en los lineamientos teóricos expuestos en la introducción. Pero se pasa demasiado pronto al estudio con-

creto de las propuestas y reacciones mutuas de los actores, sin haber desarrollado un nivel intermedio de explicación en el que se hicieran explícitas las consecuencias de ese marco de interpretación para el desarrollo político colombiano.

El recuento histórico del cuatrienio de Betancur es riguroso en la cronología. Se describe cada evento con la riqueza del que vivió el proceso paso a paso. El cubrimiento de los actores, sus propuestas y sus reacciones es amplísimo. Sin abandonar el enfoque principal, centrado en los protagonistas del proceso —gobierno y guerrilla—, los autores se ocupan simultáneamente de una diversidad de actores que incidieron definitivamente en su curso: las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, el Congreso, los gremios empresariales, las comisiones negociadoras, la prensa y los grupos paramilitares. De la misma forma están incluidos todos los aspectos que, de una u otra forma, sumados un poco al azar ante la ausencia de una estrategia coherente, configuraron el proyecto de paz y apertura democrática: la política exterior, la Cumbre política multipartidista, la Comisión de Paz, la ley de amnistía, el Plan Nacional de Rehabilitación, los acuerdos de cese al fuego, el indulto, el Diálogo Nacional, la conformación de la Unión Patriótica y la reforma política. Tampoco se olvidan, sino que, por el contrario, se enfatizan, los obstáculos que impidieron la consolidación del proyecto de Betancur: la ausencia de reformas sociales, la crisis económica, la oposición de los gremios sumada a la oposición militar, el bloqueo bipartidista y las contradictorias respuestas del fragmentado movimiento guerrillero incluidos los episodios del Palacio de Justicia y la masacre de Tacueyó.

Todos ellos son objeto de un cuidadoso análisis a través del cual el lector

logra reconstruir el proceso, peldaño por peldaño, hasta llegar a una visión panorámica, no por global menos nítida, del mismo. Sin duda alguna el trabajo de Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo constituye la explicación más completa que hasta ahora se haya escrito sobre la excepcional coyuntura política que significó el gobierno de Belisario Betancur. El libro *Actores en conflicto por la paz* tiene, sin embargo, mucho más que un simple valor documental. Su contenido cobra actualidad no sólo gracias a una cierta continuidad de las políticas de paz a lo largo de la administración Barco sino, sobre todo, debido al hecho de que hoy, pasados cuatro años de culminada la experiencia Betancur, permanecen y se reproducen los mismos obstáculos que la frustraron en esa ocasión.

Habría que hacer referencia sobre todo a cuatro factores que, en la opinión de Luis Alberto Restrepo y Socorro Ramírez, constituyeron las barreras más sobresalientes en la realización de un proceso activo de reconstrucción democrática de Colombia. En primer lugar aparecen los partidos tradicionales que, a través de sus representantes en el Congreso, bloquearon insistente y, por acción u omisión, las posibilidades de reforma durante la coyuntura del proceso de paz. Su tradición antirreformista, alimentada por la necesidad de preservar un estado de cosas sobre el cual se sustenta y reproduce su poder, llevó a que la "clase política" actuara como un eficaz filtro bipartidista de la alternativa de solución política planteada por Betancur. Esta es quizás una de las lecciones más relevantes que deja el proceso adelantado entre 1982 y 1986: no hay transformación posible mientras no se intente, paralelamente, una profunda reforma de los partidos y del Congreso que permita su vinculación activa al proyecto de cambio. Ellos, partidos y Congreso, pese a su crisis interna, son de todas formas "maquinaria pesada con la que hay que contar para que no entorpezca los mejores proyectos" (p. 56). No basta con tratar, infructuosamente, de eludir sus intentos de bloqueo. Es

preciso reformarlos, renovarlos y conseguir su respaldo.

Ante la crisis de representatividad de los partidos, surgieron los gremios empresariales como los únicos voceros organizados de la sociedad civil, representantes de las clases dominantes, en abierta contradicción frente al proyecto gubernamental. Lograron aglutinar en torno suyo un núcleo sólido de oposición a Betancur con lo cual, según los autores, se puso al descubierto "la real estructura del régimen político y del Estado colombiano de hoy. Detrás de las instituciones democráticas, del presidencialismo y del Congreso, subyace una fuerte armadura corporativa con médula militar" (p. 26).

La permanente oposición de la institución castrense a la política de paz puede ser explicada, en parte, por la ideología anticomunista y antisubversiva que permea dicha institución, pero, ante todo, por la ya larga tradición de autonomía del poder militar frente al poder civil en materia de orden público. Tanto en el discurso como en los hechos los militares dieron amplias muestras de resistencia frente a las intenciones del Presidente de restablecer la capacidad de control del poder militar por el poder civil y avanzar así en el proceso de transformación democrática. La oposición militar al proyecto de Betancur dejó en evidencia que las Fuerzas Armadas son un actor político independiente y que sin su aceptación es imposible adelantar un proceso de solución negociada del conflicto. Ante este hecho, en la opinión de Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, los dirigentes políticos sólo tienen dos posibilidades: "o emprender una cuidadosa transformación a mediano plazo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de volverlas a su función constitucional, o reconocerlas como actor político y darles la participación adecuada, sobre todo en lo tocante a la paz" (p. 280).

Finalmente, resulta imposible desconocer las dificultades derivadas de las características del otro actor en conflicto: la guerrilla. Su heterogenei-

dad en términos tanto políticos como militares impide su cohesión como sujeto único de negociación. Sus respuestas fueron diversas y no pocas veces contradictorias. El proceso de negociación hubo de multiplicarse en diversos frentes dando a su vez paso a la multiplicación de las comisiones mediadoras. Las condiciones exigidas por cada agrupación para dar cumplimiento a lo pactado fueron también heterogéneas. Por lo mismo, dificultaron su puesta en marcha y su verificación. Más grave aún que todo esto, para los autores, fue el hecho de que la mayoría de grupos guerrilleros "asumieron la política de paz como un medio para legitimar la continuación y ampliación de la guerra" (p. 281). Se trataba de movimientos armados no derrotados para quienes, dentro de una concepción militarista, las armas conservaban un valor estratégico, por encima de la negociación y la mediación política que no alcanzaron a concebir como el espacio valioso donde las fuerzas enfrentadas se disputan el consenso alrededor de sus proyectos societales.

Estos factores y tantos otros, adversos a la consolidación de la paz en Colombia, siguen pesando hoy en la realidad nacional. Las innumerables lecciones que dejó el proceso de paz de la administración Betancur no pueden ser desconocidas. Algunos errores se corrigieron a lo largo de la nueva experiencia de concertación de la administración que está por culminar, sobre todo aquellos relativos al procedimiento en el curso de la negociación. Quizá ello explique, en parte, el relativo éxito que significa la reincorporación definitiva del M-19. Muchos otros problemas de peso siguen, sin embargo, sin resolver. Ante todo aquellos relativos a las características estructurales del régimen que constituyen, a la vez, la principal fuente de su crisis y el mayor obstáculo para su resolución. Quizá por ello la paz seguirá siendo, por muchos años, un sueño esquivo para los colombianos.

Ana María Bejarano. Polítóloga, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.